

Els Opuscles del CREI

nº **5**

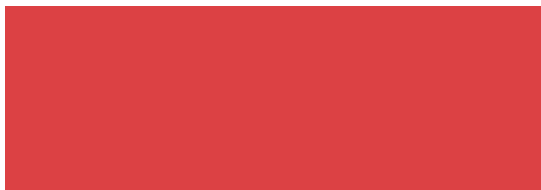
Noviembre 99

**¿Por qué crece el
sector público?
El papel del
desarrollo
económico,
el comercio y
la democracia**

Carles Boix



CENTRE DE RECERCA
EN ECONOMIA INTERNACIONAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
I UNIVERSITAT POMPEU FABRA



El Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) es un centro de investigación constituido como consorcio integrado por la Universitat Pompeu Fabra y la Generalitat de Catalunya. Su sede está en el campus de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona.

El CREI se constituyó el mes de noviembre de 1993. Fue el resultado de la combinación de dos impulsos: por un lado, de la evolución actual de la economía internacional y europea, que ha planteado nuevos retos y ha creado un entorno completamente inédito para regiones económicamente dinámicas como, por ejemplo, Catalunya; y, en segundo lugar, de los últimos desarrollos en teoría económica, que han revitalizado campos hasta ahora muy segmentados como la economía internacional, la economía regional, la teoría del equilibrio general, la teoría de los juegos de estrategia, la teoría del crecimiento, la economía del desarrollo, la macroeconomía de las economías abiertas o las finanzas internacionales.

Els Opuscles del Crei *pretenden ser los instrumentos de difusión de la investigación del CREI en el ámbito no académico. Cada Opuscle recoge, para un público general, las conclusiones y observaciones de trabajos publicados, o en vías de publicación, en las revistas especializadas. Se hace constar que las opiniones expresadas en Els Opuscles del CREI son responsabilidad de sus autores.*

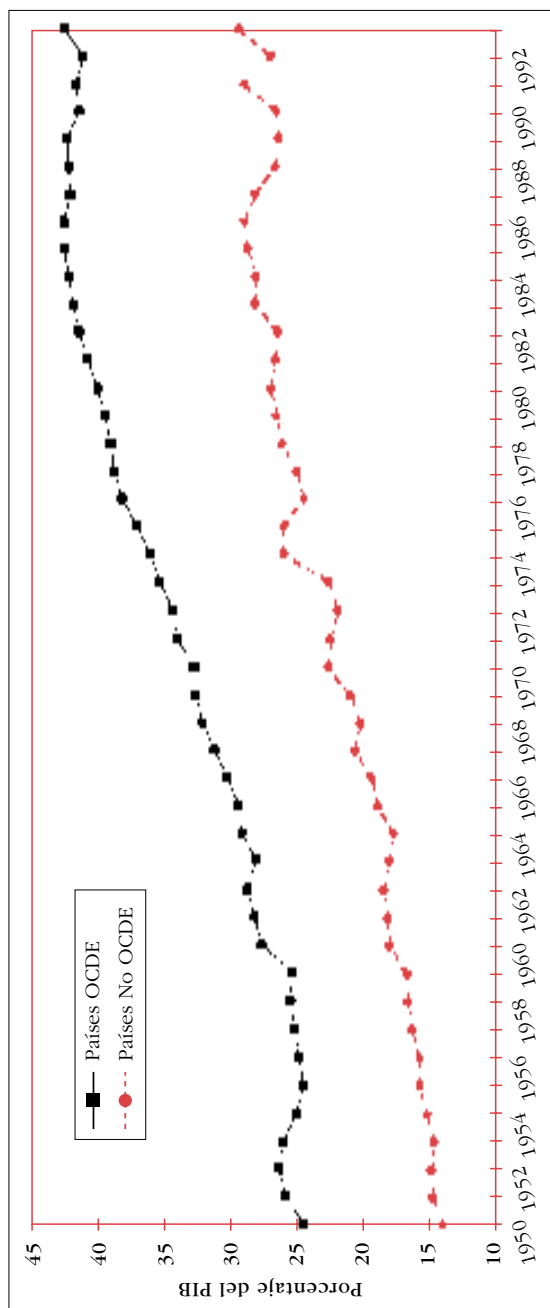
*Editado por: CREI
Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Tel. 93 542 24 98
© 1999, CREI
© de esta edición: Carles Boix
ISSN: 1137 - 7828
Diseño: Fons Gràfic
Impresión: Masanas Gràfiques
Depósito legal: B-47862-99*

¿Por qué crece el sector público? El papel del desarrollo económico, el comercio y la democracia

Carles Boix

Dos fenómenos estilizados describen la evolución del sector público a nivel mundial durante el último siglo: primero, su crecimiento estable; segundo, la presencia de diferencias importantes en su tamaño entre países. El sector público ha crecido notablemente desde el cambio de siglo. Excluyendo periodos de guerra, en el mundo avanzado el gasto del gobierno osciló en torno al 10 por ciento del PIB durante el siglo XIX. Después de 1914, no obstante, el tamaño del sector público ha aumentado substancialmente. Como se observa en el Gráfico 1, a principios de la década de 1950, los ingresos corrientes totales del sector público promediaron un 24 por ciento del PIB en la OCDE. A mediados de los años 70 habían aumentado al 36 por ciento. A principios de los años 80 se habían estabilizado alrededor del 44 por ciento. Aunque el ritmo de cambio ha sido menos dramático, el sector público también ha crecido en el mundo en vías de desarrollo. Entre los países no integrantes de la OCDE, los ingresos corrientes públicos promediaron un 14 por ciento del PIB el 1950, llegaron al 20 por

Gráfico 1 La evolución de los ingresos públicos, 1950-93



ciento del PIB a finales de los 60 y han rondado el 27 por ciento desde finales de los 70 hasta la actualidad¹.

A pesar del crecimiento estable del sector público, las diferencias entre países han continuado siendo importantes. A mediados de los años 80, por ejemplo, los ingresos públicos oscilaron entre menos del 10 por ciento del PIB en Sierra Leone y Paraguay hasta cerca del 60 por ciento en Botswana, Kuwait, Reunión y Suecia. El Gráfico 2 muestra la media y la dispersión del ingreso público entre países de la OCDE. A principios de los 50, el ingreso público pasó del 19 al 32 por ciento del PIB. En 1985 oscilaba entre el 31 y el 60 por ciento del PIB. Como muestra el Gráfico 3, la variación entre países incluso se ha agudizado en el mundo en desarrollo. A mediados de los años 80, los ingresos públicos variaban desde el 6 por ciento del PIB en Sierra Leone hasta casi un 83 por ciento en Reunión.

Asimismo es interesante observar que, a pesar de la creciente divergencia entre países, ha habido una remarcable estabilidad en la posición relativa de los países según el tamaño de su sector público. Como se aprecia en los Gráficos 4 y 5, que muestran la relación entre el ingreso público medio en 1950-59 y 1970-74, y entre el ingreso público medio en 1970-74 y 1985-89 respectivamente, aquellos países que tuvieron un sector público considerable el 1950 continúan teniendo hoy en día un sector público grande. Similarmente, muchos de los países con un estado pequeño hace cuarenta años todavía continúan clasificando muy bajo en términos de sector público².

Grafico 2 Ingresos públicos en países de la OCDE. Media y dispersión, 1950-93

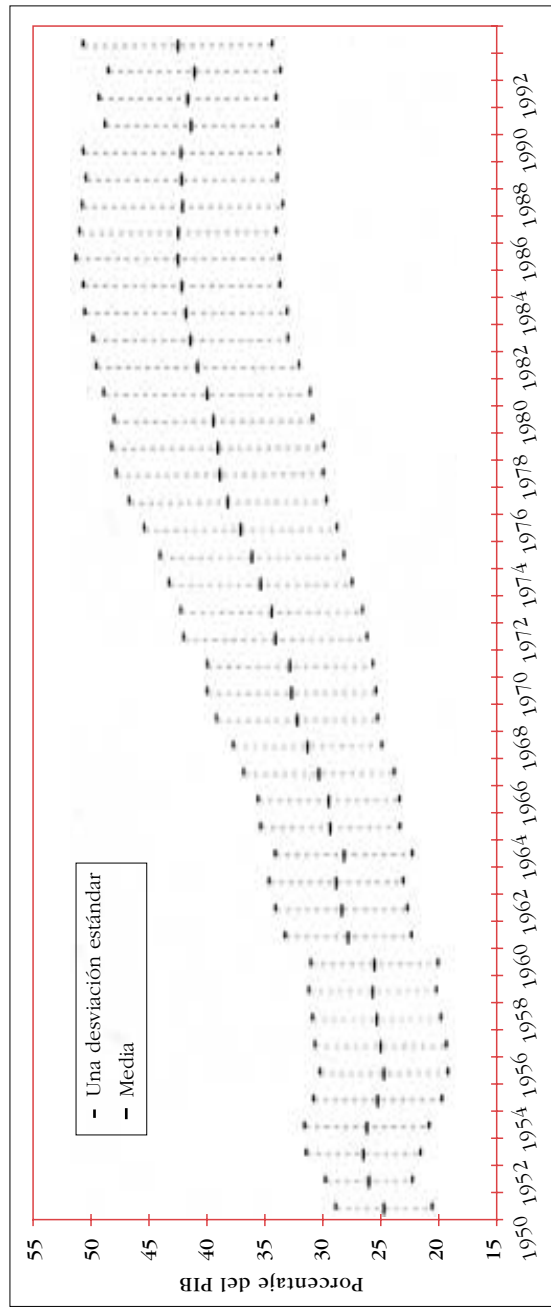
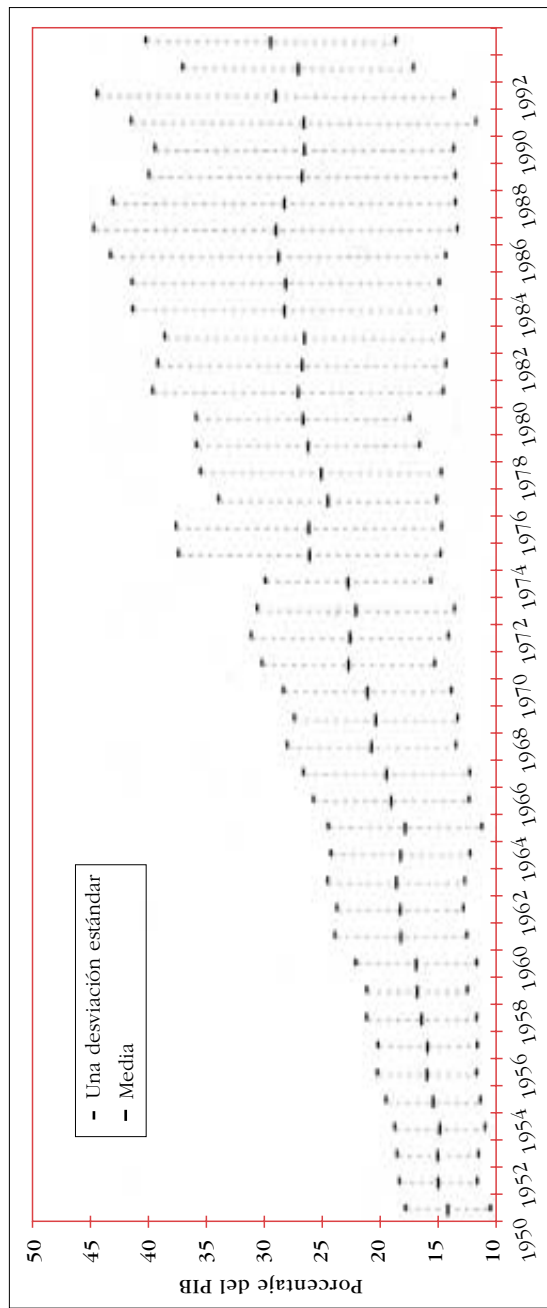


Gráfico 3 Ingresos públicos en países No-OCDE. Media y dispersión, 1950-93



1. El debate sobre las fuentes de crecimiento del sector público

El crecimiento del sector público ha originado toda una gama de modelos teóricos para explicar sus causas³. Consideremos, muy brevemente, las siguientes cuatro siguientes familias de explicaciones.

1. 1. El impacto de la modernización

Según el primer grupo de modelos, generalmente favorecido por los primeros estudios sociológicos y por bastantes economistas, un proceso generalizado de modernización económica ha tenido como mínimo dos efectos sobre la estructura de la sociedad y sobre el papel que juega el Estado en la economía. Por un lado, una economía moderna impone nuevos requisitos funcionales al Estado, tales como establecer un marco regulador, crear infraestructuras y generar trabajadores cualificados. Con el objetivo de aprovechar completamente los beneficios de los shocks tecnológicos y de flujos de capital en aumento, asociados con el proceso de desarrollo, los responsables de la política económica se ven obligados gradualmente a utilizar el Estado para generar niveles mínimos de bienes públicos.

Por otro lado, el proceso de modernización transforma la distribución de la riqueza. Aunque la organización económica y de la propiedad varía substancialmente en sociedades tradicionales, la mayor parte de la población trabaja en la agricultura. En economías agrícolas tanto la fuente de ingresos (la explotación de la tierra) como la volatilidad de aquellos (básicamente asociada a las condiciones climáticas) son generalmente comunes a la mayor parte de los individuos. Aunque quizá no universales, organizaciones comunales para compartir riesgos – como las tie-

rras comunales y las ayudas distribuidas por la iglesia – y el uso de familias extendidas para la provisión de alimentos, alojamiento y asistencia se hallan bastante generalizadas. En las sociedades modernas, los grandes avances tecnológicos y la expansión de la manufactura y de trabajos destinados al servicio transforman la vieja estructura económica en dos sentidos. En primer lugar, la distribución del riesgo económico cambia, concentrándose en segmentos específicos de la población. Esto es, el desempleo y los accidentes laborales, que emergen como contrapartida a los incrementos de productividad generados por el proceso de industrialización, pasan a ser importantes entre los trabajadores industriales y, particularmente, entre los menos cualificados. Por esta razón, el proceso de industrialización y la formación de una amplia clase de asalariados resulta en presiones más fuertes a favor de transferencias intra-generacionales. En segundo lugar, una mejora global en las condiciones materiales en general y en las tecnologías de la salud en particular extienden las expectativas de vida y finalmente conducen a un cambio en la estructura demográfica. A medida que el perfil de la población envejece y la proporción de cohortes viejas se expande, la presión por transferencias inter-generacionales, en forma de pensiones y programas de asistencia médica, aumenta⁴.

1. 2. La redistribución y el papel de la democracia

Si los modelos de modernización económica explican el crecimiento del sector público como un resultado de las nuevas necesidades funcionales de las sociedades en vías de industrialización, un segundo conjunto de teorías conectan la expansión del Estado a sus consecuencias redistributivas y explican, por tanto, su origen como un resultado de ciertas coaliciones políticas enfoca-

das a redistribuir el ingreso entre grupos sociales. Entre las múltiples formas que este punto de vista adopta, Meltzer y Richards (1981) argumentan en un artículo bastante influyente que, en una democracia, en la medida en que la renta media de una determinada comunidad política excede la renta del votante mediano, los políticos pondrán en práctica políticas redistributivas a favor de la mitad inferior de la distribución de renta. Dicho de otra manera, siempre que la distribución de renta esté sesgada hacia los ricos, los políticos gravarán a estos últimos y transferirán los ingresos a los más pobres a fin de obtener una mayoría de los votos⁵. Esto explicaría por qué el gasto público empezó a aumentar con la generalización del sufragio universal después de la Primera Guerra Mundial. Si esta teoría fuese correcta, cabría esperar, *ceteris paribus*, niveles más bajos de gasto en regímenes no democráticos. El enfoque de Meltzer y Richards tendría que ser igualmente válido para explicar la redistribución intergeneracional (en lugar de intrageneracional): a medida que las cohortes viejas aumentan de tamaño dentro de una población, el gasto público en pensiones debería aumentar⁶.

1. 3. Internacionalización económica y un sector público decreciente

La decisión de poner impuestos sobre los factores productivos, capital y trabajo, para financiar el sector público no se puede aislar de la reacción de estos factores a una presión fiscal creciente. Por esta razón, para una corriente importante de literatura la movilidad de factores (o, en términos más periodísticos, la progresiva “globalización” de la economía) restringe la autonomía fiscal de los gobiernos. La lógica de este argumento, que se aplica principalmente al capital, es sencilla. Dado que el crecimiento económico depende de la inversión, y al mismo tiempo la

inversión depende de los beneficios, el Estado está constreñido en última instancia por los cálculos racionales de los capitalistas, siempre a la búsqueda de la tasa de retorno más alta. Para evitar que el capital se traslade a países más rentables, lo que conduciría a su vez a tasas de inversión decrecientes y a un gradual estancamiento económico, todos los Estados se ven forzados a maximizar la tasa de retorno de la inversión privada ofreciendo impuestos bajos y toda clase de subsidios⁷. En resumen, en una economía altamente internacionalizada, las políticas redistributivas están claramente restringidas por la movilidad de factores.

Una variante interesante de esta posición relaciona el federalismo y el nivel de gasto público. Según este enfoque, en un sistema federal, es decir, en una área económicamente integrada pero políticamente fragmentada, el poder de monopolio del Estado se rompe tanto por la movilidad de factores como por la competición entre los niveles de gobierno. La capacidad de los agentes económicos, y en particular del capital, para trasladarse a subunidades políticas con un nivel leve de imposición conduce a una proporción más baja de impuestos al nivel de todo el país (Brennan y Buchanan 1980, Przeworski y Wallerstein 1988, Weingast 1995).

1. 4. Internacionalización económica y un sector público creciente

El impacto del proceso de internacionalización es, de todos modos, incierto. Impuestos bajos no atraen inversores privados automáticamente. Aunque bastantes países del Tercer Mundo tienen niveles impositivos bajos, la entrada de flujos de capital desde países industrializados, con un nivel de imposición alto ha sido modesto. Esto es así porque, con el objetivo de maximizar beneficios,

los propietarios del capital invierten en aquellos países (o sectores económicos) que ofrecen la tasa *net*a de retorno más alta, es decir, la separación más grande entre la tasa bruta de retorno al capital y los impuestos (Lucas 1990). Mediante la reducción de los impuestos y manteniendo bajos los salarios podría ser posible aumentar los beneficios y por tanto estimular la inversión privada. Pero la tasa de retorno al capital depende de la productividad de los factores que entran en el proceso productivo. Dado que el principal determinante de la rentabilidad bruta es la productividad de los factores, los impuestos pueden ser altos mientras la productividad se mantenga suficientemente alta para proporcionar los beneficios netos más altos (en comparación a otros lugares) para el capital. El capital siempre preferirá un país donde los impuestos son altos, siempre que la productividad sea muy alta, a un país donde tanto impuestos como productividad sean bajos.

De hecho, y contrastando fuertemente con la predicción que altos niveles de internacionalización conducen a niveles bajos de gasto público, un modelo de gasto público muy influyente ha relacionado positivamente el nivel de intervención del gobierno con el nivel de apertura de la economía. Se ha mostrado como niveles más altos de integración en el comercio incrementan el tamaño del sector público en democracias avanzadas (en ciencia política, Cameron 1978, Katzenstein 1985; en economía, Rodrik 1998). El gasto del gobierno crece en economías abiertas como mecanismo de compensación por los costes de ajuste en la apertura del comercio. Países pequeños y abiertos, que están intensamente afectados por los ciclos de negocios mundiales de los cuales no se pueden aislar mediante políticas macroeconómicas estándar, eligen mantener altos niveles de gasto público y transferencias para proteger a los trabajadores en sus sectores económicos más débiles.

Niveles altos de gasto son entendidos, por tanto, como un requisito funcional para el mantenimiento de la estabilidad interna y del orden social. Adicionalmente, niveles altos de intervención gubernamental constituyen un mecanismo para superar fallos de mercado en la provisión de cualificación profesional e infraestructuras y, facilitan, por tanto, la transición de los desempleados a áreas de producción más dinámicas en países que necesitan competir en los mercados mundiales para sobrevivir.

2. Problemas de la investigación empírica existente

La investigación contemporánea sobre las causas del gasto público presenta dos puntos débiles fundamentales: el primero, empírico; el segundo, estrictamente teórico.

La mayoría de los estudios empíricos realizados hasta la fecha no son concluyentes (Alt y Chrystal 1983, capítulo 8; Lybeck 1988; Mueller 1988, capítulo 17; Holsey y Borcharding 1997). La mayor parte de los académicos utilizan muestras limitadas, tales como series temporales de un país o un corte transversal de países, y se concentran en una única medida de política económica, como transferencias en concepto de seguridad social o consumo público⁸. Por esta razón, es difícil realizar afirmaciones teóricas generales. Algunos estudios recientes han unificado series temporales y de corte transversal para la mayoría de los países de la OCDE (Pampel y Williamson 1988; Hicks y Swank 1992; Huber, Ragin y Stephens 1993). Aunque estos estudios cuantitativos más amplios han progresado notablemente en la determinación de las causas que explican el crecimiento del sector público, diversos factores explicativos, tales como el predominio de gobier-

nos de izquierda, instituciones corporatistas, el grado de apertura comercial y la proporción entre sí de la población anciana, están tan correlacionados que es difícil averiguar, en primer lugar, qué variable es de hecho importante y, en segundo lugar, a través de qué mecanismo específico lo es. Además, su enfoque en países de la OCDE les otorga una limitada aplicabilidad. En términos generales, con esta muestra de democracias avanzadas sólo podemos comprobar débilmente los efectos que el crecimiento económico y el correspondiente cambio social, el impacto de regímenes democráticos (en relación con los dictatoriales) y la influencia de una distribución desigual de los recursos (que conduce a diferentes presiones redistributivas) tienen sobre el sector público.

Para solucionar estos problemas, he reunido una amplia muestra de países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta muestra incluye todos los países para los que hay disponibles datos comparables sobre ingresos corrientes de todos los niveles de la administración pública desde 1950 hasta 1990. Los datos provienen de *United Nations National Accounts* (ONU, diversos años) y de *Governmental Financial Statistics Yearbook* (FMI, 1971-90)⁹. La muestra incluye unos 80 países (22 son miembros de la OCDE) con ciertas fluctuaciones dependiendo del periodo temporal, y consta de unas 2,300 observaciones. El análisis estadístico, discutido en las secciones 4 y 5 más abajo, se basa en un panel de datos con información de corte transversal y anual.

La variable dependiente es ingresos corrientes del gobierno general (la suma de todos los niveles de la administración pública), en lugar de gasto público, con el objetivo de maximizar la muestra analizada. En *United Nations National Accounts* se ofrecen datos menos completos sobre desembolsos públicos. Aunque otras dos

bases ofrecen muestras más grandes para partes del gasto público, no son compatibles con los objetivos de este artículo. En las *Penn World Tables* se presenta la proporción del consumo de los gobiernos de unos cien países – pero el consumo del gobierno representa una fracción de todo el gasto del gobierno. El Banco Mundial ofrece niveles totales de gasto del gobierno para unos 80 países. Pero estos datos (así como los datos del FMI) presentan gasto sólo al nivel del gobierno central – la cual cosa produce valores extremadamente sesgados para países como Argentina, India o EEUU¹⁰.

3. Aspectos teóricos sin resolver

La ausencia de resultados concluyentes producidos por la investigación sobre el crecimiento del sector público no se debe únicamente a las limitaciones del trabajo empírico existente, sino también a una especificación inadecuada de los modelos existentes.

Los modelos puramente políticos, como los descritos en la subsección 1.2, se concentran demasiado en el efecto que una distribución desigual de los recursos tiene sobre el nivel de imposición, hasta el extremo de negligir cómo el desarrollo económico altera la estructura subyacente de preferencias del electorado. Por esta razón, no pueden explicar por qué la renta por cápita está tan bien correlacionada con el tamaño del sector público.

Por su parte, los modelos de modernización, que se basan substancialmente en la idea que los políticos responden mecánicamente a los gustos (cambiantes) del votante mediano, no tienen en cuenta las características políticas y institucionales en las que se deciden las medidas económicas. Es

decir, parten de la hipótesis de que los políticos son planificadores benevolentes que, interesados en maximizar la renta nacional, automáticamente utilizan el Estado para proveer los bienes públicos (como infraestructuras, educación y agencias reguladoras) que harán posible que el país disfrute completamente de los beneficios de la modernización. Esta premisa es, no obstante, problemática: los responsables de la política económica no se comportan siempre como planificadores benignos, interesados en anteponer el bienestar colectivo a la obtención de ganancias personales a corto plazo. Sólo bajo la presencia de aquellas instituciones políticas y legales que efectivamente restrinjan la persecución de rentas personales por parte de los políticos se introducirán medidas económicas óptimas. Las instituciones democráticas, al facilitar el control de los responsables de la política económica, en promedio deberían generar una provisión de bienes públicos más completa¹¹. De manera similar, el nivel al que los políticos desarrollarán programas de pensiones y un sistema de salud pública dependerá finalmente de la existencia de canales institucionales que hagan que los políticos sean sensibles a las demandas de los ciudadanos. En suma, el desarrollo económico es una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento del sector público: los mecanismos institucionales y políticos a través de los cuales los políticos toman decisiones determinan la intensidad con que la modernización afecta al tamaño del Estado.

Un problema similar ha afectado a la literatura sobre la internacionalización de la economía y el tamaño del Estado. El por qué unas economías son más abiertas que otras sigue sin respuesta y la presencia de un sector público grande es considerada simplemente como un requisito funcional para garantizar un régimen de comercio libre. Sin embargo, como se discute con más detalle en

la sección 5, la selección de políticas comerciales (y fiscales) tan sólo es comprensible y modelizable como resultado del conflicto político entre diferentes conjuntos de agentes (políticos y votantes) sobre el régimen comercial y el nivel impositivo.

4. Resultados (I). La interacción del desarrollo económico y el régimen político

Para superar los problemas que presentan las teorías existentes, necesitamos un modelo que integre tanto el impacto de variables económicas como de factores puramente políticos. En esta sección consideraré, en términos bastante generales, como política y desarrollo interactúan hasta determinar el tamaño del sector público¹². La discusión del papel que juega el comercio se presenta por separado en la sección 5.

Con el desarrollo económico las presiones para agrandar el sector público aumentan, como se ha indicado en la subsección 1.1, por dos razones. En primer lugar, los procesos de urbanización y de industrialización generan incentivos para la provisión estatal de bienes colectivos como agencias reguladoras, infraestructuras y cualificación de la mano de obra. En segundo lugar, la emergencia de una economía industrial y de una población que envejece modifica la distribución de renta subyacente hasta generar una demanda más alta de gasto público.

No obstante, el proceso de desarrollo económico constituye una condición necesaria pero no suficiente para la aparición de un sector público grande. Los responsables de la política económica fijan el nivel impositivo (para financiar la provisión de servicios y transferencias) de acuerdo

con las preferencias del votante mediano. La identidad de éste varía según la legislación electoral vigente (así como con el nivel de movilización del electorado). Esta variación determina, a su vez, el tamaño del sector público. Bajo un régimen democrático, en el que los políticos responden a las demandas de todos los votantes, el sector público crece paralelo a los cambios estructurales generados por el proceso de desarrollo económico. En cambio, en regímenes autoritarios, en los que todos o como mínimo una parte substancial del electorado se encuentra excluido del proceso de toma de decisiones, precisamente para evitar las consecuencias redistributivas de la democracia, el tamaño del sector público se mantiene pequeño.

La Tabla 1 muestra los resultados de estimar por separado y conjuntamente, a través de técnicas econométricas detalladas en el apéndice, el impacto del desarrollo económico (medido como renta real por cápita en precios de 1985), la apertura comercial (medida por el logaritmo de la suma de importaciones y exportaciones dividida por el PIB) y el régimen político (democrático o autoritario)¹⁵.

De acuerdo con las predicciones de la teoría de la modernización, y para el periodo analizado (1950-90), la columna 1 muestra que el desarrollo económico afecta positivamente el tamaño del gobierno. Manteniendo constante la apertura comercial (en la media muestral del 62 por ciento del PIB), en países subdesarrollados (con renta por cápita de 1.000 dólares) los ingresos públicos fluctúan alrededor del 17 por ciento del PIB. Por encima de una renta por cápita de 3.500 dólares, el ingreso público aumenta hasta un 30 por ciento. En un país con una renta por cápita de 15.000 dólares, cabría esperar que llegase al 47 por ciento del PIB. La presencia de instituciones demo-

Tabla 1

La interacción de régimen político y desarrollo económico

Variables Independientes	Ingresos públicos como porcentaje del PIB, 1950-1990		
	(1)	(2)	(3)
Constante	-76,73* (2,29)	-60,44* (3,13)	-69,11* (2,59)
Renta Por Capita (Log) ^a	11,33* (0,31)	8,88* (0,44)	10,98* (0,31)
Apertura Comercial (log de suma de exportaciones y importaciones sobre el PIB) ^b	3,48* (0,41)	3,93* (0,41)	2,23* (0,45)
Instituciones Democráticas ^c	0,95* (0,35)	-23,62* (3,25)	-11,45* (2,05)
Instituciones Democráticas x Log de Renta Real Por Cápita		3,21* (0,42)	
Instituciones Democráticas x Apertura Comercial			3,24* (0,53)
Número de observaciones	2322	2322	2322

^a Renta Por Cápita. Log de PIB por cápita en \$ en precios constantes de 1985. Fuente: World Penn Tables.

^b Apertura Comercial. Log de la suma de exportaciones y importaciones sobre PIB. Fuente: World Penn Tables.

^c Instituciones Democráticas. Democracia=1; No-democracia=0. Fuente: Alvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski (1996).

Estimación: Mínimos Cuadrados Generalizados de Modelo de *Random-Effects*.

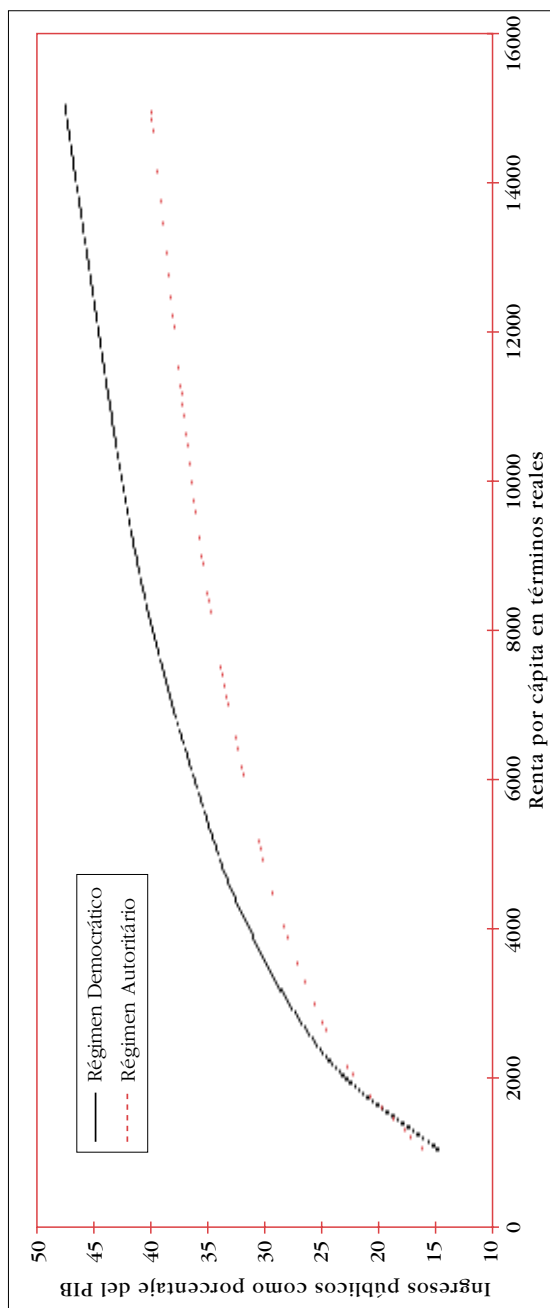
Los errores estándar están presentados entre paréntesis.

* p<0.01

cráticas tiene un efecto positivo, pero reducido, en la magnitud de los ingresos – un 0,95 por ciento del PIB más alto si el país es democrático.

Para realizar un test de la interacción entre la modernización socioeconómica y las instituciones políticas, añadido el término interactivo 'Instituciones Democráticas x (Log de) Renta Real por Cápita' en la columna 2 de la Tabla 1. Para interpretar los resultados de la columna 2, que

Gráfico 6 La evolución de los ingresos públicos como interacción de desarrollo y régimen político



confirma las predicciones teóricas, simulo en el Gráfico 6 la evolución de los ingresos públicos corrientes como proporción del PIB a medida que la renta real por cápita aumenta, bajo un sistema democrático y bajo un régimen dictatorial (la apertura comercial se ha igualado a la media muestral del 62 por ciento del PIB). La estructura de la simulación en el Gráfico 6 sugiere los siguientes fenómenos estilizados. En primer lugar, el nivel de desarrollo tiene un impacto incondicional sobre la medida del sector público. Debido a los incentivos para proveer ciertos bienes públicos, el sector público siempre crece con la renta por cápita. Independientemente del régimen político vigente, los ingresos públicos aumentan unos 15 puntos porcentuales desde niveles muy bajos de desarrollo hasta niveles medios, y crecen otros 10 puntos porcentuales desde niveles medios de desarrollo hasta niveles altos.

En segundo lugar, la naturaleza del régimen político no afecta por si sola el tamaño del gobierno. Para que esto fuera cierto, el sector público debería ser siempre mayor bajo un sistema democrático para cualquiera de los niveles de renta. Los resultados muestran, en cambio, que los regímenes democráticos en economías auténticamente subdesarrolladas no tienen incentivos para gastar más que los regímenes autoritarios. A niveles extremadamente bajos de desarrollo los ingresos públicos corrientes son, de hecho, más altos en regímenes no democráticos. Para un nivel de renta por cápita de 500 dólares (en precios de 1985), los ingresos públicos son un 4 por ciento más bajos en democracias que en regímenes autoritarios. Esto podría estar causado por dos factores. Primero, la demanda de transferencias asociada con el desarrollo no ha afectado a los estados democráticos. Segundo, es probable que los estados autoritarios establezcan impuestos más altos para financiar sus mecanismos represivos.

Finalmente, cuando la modernización socioeconómica tiene lugar, las instituciones democráticas comportan gobiernos más grandes. La modernización genera un conjunto de demandas y necesidades a las cuales los políticos democráticos deben responder. Al superar la renta real por cápita los 1.000 dólares, el sector público se expande a un ritmo más rápido bajo regímenes democráticos. Con una renta por cápita de 4.000 dólares, los ingresos públicos son 3 puntos porcentuales más altos en un país democrático. Para una renta por cápita de 10.000 dólares, los ingresos públicos serían hipotéticamente 6 puntos porcentuales más altos en una democracia (aproximadamente una sexta parte más en términos relativos)¹⁴. La experiencia histórica de España ejemplifica, con gran exactitud, estos resultados. En 1974, España tenía una renta por cápita de 7.291 dólares (en precios de 1985) y los ingresos públicos corrientes totalizaron un 22,8 por ciento del PIB. Diez años más tarde, aunque la renta por cápita apenas había aumentado (a 7.330 dólares), los ingresos públicos corrientes se habían incrementado hasta el 32,7 por ciento del PIB. La transición a la democracia había transformado el papel del sector público. De la misma forma, en Singapur, o en Corea, con niveles medios de desarrollo, la falta de un sistema democrático condujo a un sector público mucho más pequeño de lo que cabría esperar en términos estrictamente económicos.

5. Resultados (II). La interacción del comercio y democracia

Los resultados de la Tabla 1 (columna 1) apuntan hacia una relación directa entre el comercio y el tamaño del sector público, confirmando así trabajos anteriores de Cameron (1978), Katzenstein (1985) y Rodrik (1998). Para estos

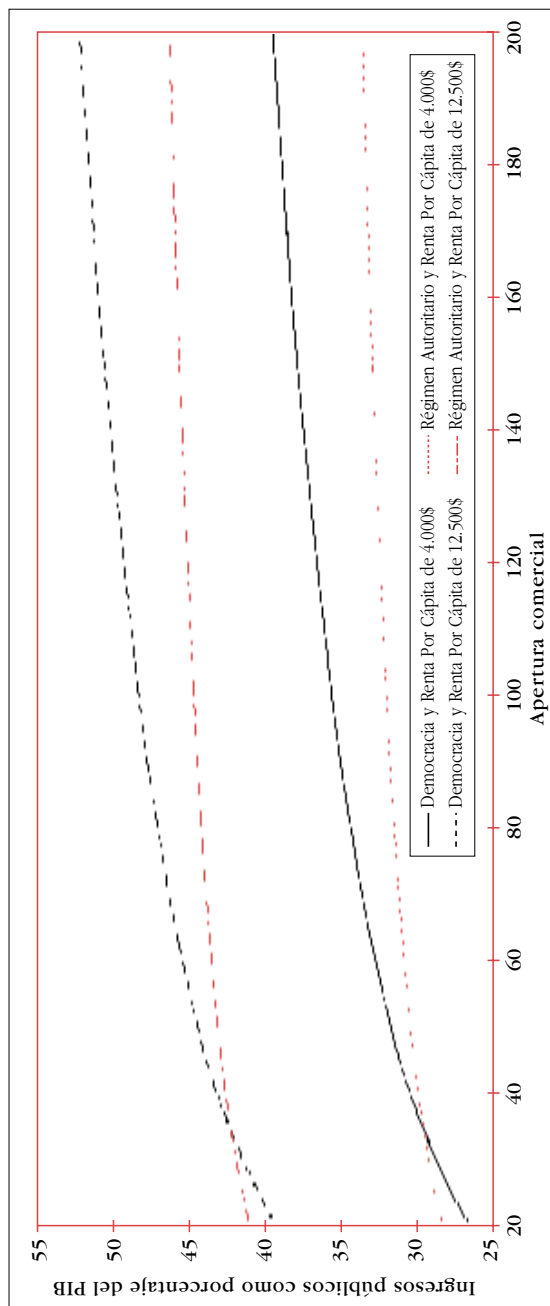
autores, a medida que la apertura aumenta, el Estado adopta un papel destacado en minimizar los riesgos de una mayor integración económica y en compensar sectores económicos en declive, actuando principalmente como dictador benevolente o maximizador. La política está, de todos modos, eminentemente ausente en este enfoque. Dejando de lado la investigación más reciente sobre los orígenes políticos de diferentes regímenes arancelarios (Keohane y Milner 1996), el comercio se considera como una variable determinada exógenamente. Negligiendo la literatura sobre las consecuencias redistributivas del gasto público (Esping-Andersen 1990; Holsey y Borcharding 1997), el crecimiento del sector público se entiende como una simple respuesta funcional a los requisitos del comercio.

Una comprensión más satisfactoria de la relación entre la economía internacional y la política doméstica requiere, en cambio, entender la elección de las políticas comercial y fiscal como un proceso simultáneo en la arena política. Por esta razón, los países pueden seguir tres estrategias (estilizadas)¹⁵:

1. Para aislar a los actores domésticos de los cambios en precios relativos inducidos al nivel internacional, los responsables de la política económica nacional pueden escoger cerrar la economía doméstica. Con los actores domésticos relativamente aislados de los ciclos de negocios mundiales no hay incentivos para aprobar niveles más altos de gasto público para compensar a los votantes por pérdidas de trabajos (temporales o permanentes)¹⁶. En resumen, *ceteris paribus*, el aislamiento económico deprime el nivel de gasto público.

2. Una vez aceptado un régimen de libre comercio, y dado que la gestión de la demanda

Gráfico 7 La evolución de los ingresos públicos como interacción de comercio y régimen político



keynesiana es difícilmente factible para economías abiertas (Alt 1985), los responsables de la política económica sólo pueden garantizar niveles altos de bienestar social (y por tanto el apoyo necesario para gobernar) incrementando el peso del sector público para sostener los sectores económicos en crisis.

3. Dado que la combinación de apertura y compensación requiere impuestos más altos, los responsables de la política económica podrían considerar favorecer una tercera estrategia política. Excluyendo de una manera sistemática, es decir, a través de un sistema autoritario, aquellos sectores que pueden perder al aumentar la integración económica, evitarán incrementar el gasto público.

Para realizar un test sobre el impacto que las instituciones políticas (especialmente la democracia) pueden tener sobre el tamaño del sector público para diferentes niveles de comercio, añadido el término interactivo 'Instituciones Democráticas x Apertura Comercial' al modelo básico de la columna 1. En la columna 3 de la Tabla 1 se presentan los resultados de la regresión. La renta por cápita y la apertura comercial continúan estimulando los ingresos públicos. La presencia de instituciones democráticas reduce ligeramente el gasto público. Pero este resultado debe ser considerado conjuntamente con el signo del término interactivo. A medida que el comercio crece, el sector público crece en regímenes democráticos.

El Gráfico 7 simula los resultados de la columna 3. La simulación incluye la evolución de los ingresos públicos corrientes cuando la apertura comercial aumenta en dos niveles de desarrollo – un país con una renta por cápita de 4.000 dólares y un país con una renta por cápita de 12.500

dólares. Cuando la suma de exportaciones y importaciones llega al 20 por ciento del PIB, los ingresos públicos alcanzan un 27-28 por ciento del PIB. A medida que la economía se abre, el tamaño del gobierno aumenta pero a tasas diferentes. En regímenes democráticos crece aproximadamente unos 9 puntos porcentuales del PIB cuando las exportaciones y las importaciones representan el 100 por ciento del PIB. En regímenes autoritarios, en cambio, sólo aumenta en unos 3,5 puntos porcentuales. En suma, una economía cerrada presiona a la baja los ingresos públicos. Pero es la combinación de régimen político y apertura lo que realmente acelera la formación de sectores públicos sustanciales.

6. Discusión y observaciones finales

La exploración de las fuerzas que han dado forma al papel económico del Estado en países desarrollados y en vías de desarrollo muestra que dos fuerzas principales, la modernización y la apertura comercial, determinan el tamaño del sector público.

Sociedades pre-modernas tienen gobiernos pequeños, independientemente de su régimen político. La India democrática, los regímenes autoritarios del África subsahariana o incluso las democracias limitadas de la Europa del siglo XIX encajan en este patrón.

El proceso de modernización económica ha conducido a sectores públicos más grandes a través de dos etapas secuenciales. En una primera etapa, a medida que economías basadas en la agricultura se convierten en sociedades urbanas y enfocadas hacia la manufactura, dos cambios estructurales abren camino a un sector público más grande. Por un lado, los procesos de urbanización e industrialización generan nuevas demandas: es necesaria una fuerza laboral cualificada para aprovechar las nuevas mejoras en productividad, las infraestructuras son una necesidad para un apropiado desarrollo del país. Por otro lado, la distribución de los riesgos y los mecanismos para enfrentarse a ellos cambian. En sociedades agrícolas, los riesgos son generalmente comunes a la mayoría de individuos. La provisión de atención se canaliza a través de familias (extendidas). Los shocks tecnológicos asociados a la industrialización conllevan diferenciación de la población según cualificaciones y riesgos, tales como accidentes laborales y desempleo, en segmentos específicos de la población. Con la reducción del número de familias extendidas, los medios tradicionales para proporcionar apoyo a los trabajadores en periodos de desempleo y de crisis económica, es decir, ayuda informal proveniente de familiares, desaparecen. Es necesario desarrollar, por tanto, mecanismos de seguro colectivo para suavizar el impacto del paro. Finalmente, las mejoras tecnológicas en las áreas de la producción de alimentos y de la atención sanitaria aumentan la expectativa de vida y conducen a la emergencia de instituciones sanitarias y sistemas de pensiones.

En una segunda etapa, las fuerzas de la modernización continúan afectando a las economías más maduras. Una vez el Estado de Bienestar ha sido establecido y se ha producido la transición demográfica a un perfil poblacional más viejo, el gasto público continúa aumentando, conducido ahora por los crecientes costes de los programas de sanidad y pensiones.

A pesar de esto, la modernización es sólo una pre-condición para que aparezcan sectores públicos más grandes. Es cierto que tanto la existencia de fallos de mercado, que pueden amenazar la

provisión de educación o de todo tipo de infraestructuras como el efecto positivo de una administración pública adecuada sobre la inversión privada incentivan a los Estados a aumentar su intervención y su nivel de gasto público. No obstante, la mayor parte del crecimiento del sector público está relacionado con la creación de programas redistributivos (principalmente a través de transferencias y, hasta un cierto punto, a través del consumo público). Y estos programas redistributivos emergen en función del régimen político establecido y del nivel de movilización política. En regímenes autoritarios, generalmente establecidos para bloquear toda redistribución de rentas, los impuestos se mantienen bajos. Por el contrario, en regímenes democráticos, los impuestos llegan a ser altos cuando el proceso de modernización da lugar a una estructura social que conduce al desarrollo de transferencias intra e intergeneracionales, de acuerdo con los intereses de los votantes.

De nuevo, el comercio afecta el tamaño del sector público. Pero lo hace, nuevamente, de forma condicional al régimen político vigente. Aquellos países que aplican políticas proteccionistas para sostener el bienestar de sectores domésticos importantes, o que se benefician de una economía casi-cerrada dado su tamaño y diversidad, no realizan un gasto público substancial. De acuerdo con los resultados empíricos de la Tabla 1, en economías cerradas, como Argentina, India, Irán, Japón, México o los Estados Unidos, los ingresos públicos como proporción del PIB son mucho más bajos de lo que deberían ser de acuerdo con sus respectivos niveles de desarrollo.

Para mantener la apertura comercial en contextos democráticos, los responsables de la política económica deben desarrollar esquemas compensatorios con fondos públicos para conseguir el apoyo de los perdedores de una mayor inte-

gración económica. En respuesta a la crisis económica de los años 30, la clase política en pequeños Estados europeos utilizó el gasto en inversión y bienestar para estructurar una coalición en defensa del comercio libre¹⁷. Esta solución contrastó con la decisión de establecer políticas proteccionistas como mecanismo para estabilizar los precios relativos domésticos sin haber de incrementar los impuestos y las transferencias redistributivas a través del sector público en América Latina (y también en Nueva Zelanda y Austria hasta cierto punto) en el mismo periodo de tiempo.

Para acabar, dado que la combinación de apertura y compensación requiere niveles de impuestos más altos, los responsables de la política económica pueden considerar excluir de manera sistemática, es decir, mediante un sistema autoritario, a aquellos sectores que pueden perder en aumentar la integración económica, para evitar incrementar el gasto público. En regímenes autoritarios abiertos, como las economías del Este Asiático, el sector público es entre un 10 y un 15 por ciento más pequeño que en un sistema democrático con niveles similares de integración económica.

La discusión y los resultados presentes en esta investigación son relevantes en los debates contemporáneos sobre las consecuencias políticas y económicas de la integración comercial (y financiera) en, como mínimo, dos aspectos: la sostenibilidad del Estado del Bienestar y los cambios que la economía internacional puede producir en el número y funcionamiento de los estados. Consideremos la primera de estas cuestiones. En términos genéricos, la literatura actual sobre los efectos de la apertura económica se puede dividir en dos campos. Por un lado el enfoque más extendido considera que el proceso de globaliza-

ción económica simplemente impone restricciones crecientes a la habilidad de los Estados para gobernar la economía. Por el otro lado, un conjunto de investigadores subraya la sorprendente correlación existente entre el nivel de apertura y el tamaño del sector público para concluir que el hecho que la mayor parte de economías abiertas se asocien consistentemente a estados más grandes demuestra, de una manera inequívoca, que más comercio no conduce a impuestos más bajos. Es probable que, una vez consideradas todas las variables relevantes, los dos enfoques sean compatibles. Por un lado es cierto que la apertura no restringe automáticamente la capacidad de desarrollar un Estado de Bienestar – aunque, de nuevo, la expansión del sector público se debe a decisiones políticas (y solamente en segundo lugar a necesidades económicas y estructurales). Pero por otro lado encontramos que el hecho que la compensación pública tiene límites parece haber sido negligido por la literatura actual sobre comercio y crecimiento del sector público. La existencia de un sector público grande depende de la ventaja comparativa de los sectores exportadores que lo pagan. Si esta ventaja decae, se reducen los incentivos para sostener un gobierno grande – y los países comienzan a desplazarse hacia un sistema proteccionista (el camino seguido por América del Sur en las décadas del 1930 y del 1940) o hacia un régimen autoritario de comercio libre.

La forma en que la política fiscal y los regímenes comerciales se relacionan sugiere también que el trabajo que sirve como base de este *opus-cle* puede resultar de utilidad para contribuir a identificar las causas que explican la evolución del sistema estatal y de cualquier variación histórica en el número de países. El supuesto subyacente en el modelo que sustenta los resultados empíricos descritos consiste en un responsable de

política económica interesado en maximizar la función de bienestar del votante mediano con el objetivo de ganar las elecciones (o más genéricamente, para permanecer en el poder). Su primera elección consiste en establecer una economía relativamente cerrada (donde sería posible suavizar el ciclo de negocios) o en abrir la economía (donde la gestión de la demanda presentaría riesgos). Pero las múltiples fórmulas mediante las que se puede establecer un sistema autárquico han quedado sin explorar. Por definición, la autarquía ha sido identificada con elevar los aranceles domésticos. Pero una economía cerrada también puede ser resultado de la integración de países anteriormente separados. En el contexto de este modelo, el proceso de unificación europea puede ser comprendido básicamente como una respuesta alternativa (y más barata) a la globalización, respecto a expandir el Estado del Bienestar en cada Estado europeo un paso adelante más.

Apéndice

Para determinar las variables que determinan el tamaño del gobierno, he estimado el siguiente modelo en un corte transversal de países:

$$\text{Ingresos Públicos} = \alpha + \alpha_1(\text{Economía}) + \alpha_2(\text{Comercio}) + \alpha_3(\text{Instituciones Políticas}) + \varepsilon_t$$

1. 'Economía' incluye el conjunto de variables que miden los efectos del desarrollo económico (y los efectos generales de la modernización) sobre el tamaño del gobierno:

(a) El logaritmo de la renta real por cápita (en dólares constantes, *Chain Index*, expresado en precios internacionales, con base 1985), obtenido de *Penn World Tables*,

(b) el porcentaje medio de población urbana en el periodo 1970-90, obtenido del Banco Mundial;

(c) la proporción media del sector agrícola sobre el PIB durante 1970-90, obtenida del Banco Mundial;

(d) la proporción media de la fuerza laboral en sectores manufactureros durante 1970-90, proporcionada por el Banco Mundial;

(e) el 'ratio de dependencia', que consiste en el número de años en que la expectativa de vida excede 60 años, durante 1970-90; la expectativa de vida proviene del Banco Mundial.

2. 'Comercio' incluye:

(a) una medida del impacto de la apertura sobre los gobiernos, calculado como el logaritmo del ratio del comercio (suma de importaciones y de exportaciones) sobre el PIB, y proviene de *Penn World Tables*,

(b) el ratio de exportaciones de combustible sobre exportaciones totales, durante 1970-90, obtenido de las tablas del Banco Mundial;

(c) la proporción de exportaciones primarias no combustibles sobre exportaciones totales, para 1970-90, obtenidas de las tablas del Banco Mundial.

3. 'Instituciones Políticas' incluye el siguiente conjunto de variables políticas y institucionales:

(a) una variable anual que indica si cada país es una democracia competitiva;

(b) una variable anual que indica si cada país es una 'burocracia';

(c) una variable anual que indica si cada país es una 'autocracia';

(d) una variable anual que indica si cada país es independiente.

Para medir la presencia de un régimen democrático, burocrático o autocrático, seguimos el índice desarrollado por Alvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski (1996) y la clasificación presentada en el apéndice 1 de su artículo. Los regímenes democráticos son definidos como aquellos regímenes "en que los cargos públicos se eligen mediante elecciones con candidatos." (p.4) Las burocracias son dictaduras que tienen cuerpos legislativos. Autocracias son las dictaduras que no disponen de tales órganos, y que por tanto se puede considerar que no tienen ningún tipo de norma institucionalizada para operar el gobierno.

Para la computación de la regresión he utilizado la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con 'variance-component' (GLS) para corregir la manera en que los supuestos subyacentes de los mínimos cuadrados generalizados (OLS) son violados por los datos de panel entre países (cf. Hsiao 1986, Hicks 1994).

Notas a pie de página

(1) Los Gráficos 1 hasta el 5 están basados en datos obtenidos de United Nations National Accounts (Naciones Unidas, diversos años) y de Governmental Financial Statistics Yearbook (IMF, 1971-90).

(2) El Gráfico 5 también muestra que, como mínimo entre países de la OCDE, la década del 1960 presenció un crecimiento considerable del sector público, especialmente en algunos países escandinavos, Holanda y Bélgica. A partir de mitades de la década del 1970, el sector público volvió a expandirse a una tasa extremadamente uniforme en todos los países. A mediados de la década del 1980, los ingresos públicos como proporción del PIB experimentaron una ligera contracción tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

(3) Para reseñas más extensas, ver Lybeck (1988), Holsey y Borcherding (1997).

(4) Para estudios sociológicos del proceso de modernización económica, ver Wilensky (1975) y Flora y Alber (1981). Entre los economistas, el recurso a explicaciones basadas en los procesos de cambio tecnológico y estructural ha adoptado principalmente dos formas. Por un lado, la llamada ley de Wagner afirma que el gasto público aumenta con el progreso social porque el tipo de bienes y servicios proporcionados por el sector público tienen una demanda de alta elasticidad-renta. Por otro lado, la llamada enfermedad de costes de Baumol predice que la combinación de incrementos similares de salarios reales en los sectores público y privado con un crecimiento más bajo de la productividad en el sector público (que es un sector de servicios y es, por tanto, una industria relativamente intensiva en trabajo) comparado con el sector de la manufactura lleva a un aumento de los costes de los servicios del gobierno en términos reales a lo largo del tiempo.

(5) El nivel al que los políticos gravarán a los ricos está restringido, de todos modos, por la intensidad con que un nivel excesivo de impuestos desincentiva el trabajo entre los contribuyentes altamente retribuidos y deprime, por tanto, el volumen total de renta disponible para redistribuir.

(6) Además de modelos del votante mediano, otros modelos redistributivos explican el tamaño del gobierno como resultado de coaliciones políticas específicas entre grupos o, en el contexto de democracias modernas, partidos (con ideologías diferentes) en el gobierno. Si dadas unas ciertas condiciones los políticos no convergen hacia el votante mediano, es decir, si los partidos o grupos políticos divergen, cabe esperar que el gasto público esté determinado por el partido o grupo en el poder (Hibbs 1987), con independencia de la posición del votante mediano. Para modelos sociológicos que relacionan el gasto público y Estados del bienestar con la solidez de una clase particular o con alianzas entre clases, ver Esping-Andersen (1990).

(7) Para un análisis de la dependencia del Estado respecto al capital, ver Hirschman (1981) y Przeworski y Wallerstein (1988). El nivel de movilidad del capital varía, de hecho, dependiendo del tipo de capital y está inversamente relacionado con su especificidad. A medida que el capital es menos específico (es decir, cuando tiene más usos alternativos), es más móvil y por tanto tiene más poder o influencia sobre el Estado. Ver Alt (1987) y Frieden (1991: 19-22).

(8) Para estudios iniciales de un número limitado de casos, ver Titmuss (1958) y Peacock y Wiseman (1961). Para estudios iniciales de corte transversal, ver Cutright (1965) y Wilensky (1975) sobre países avanzados y desarrollados, Jackman (1975) sobre Estados americanos, y Korpi (1989) y Cameron (1978) sobre países de la OCDE solamente.

(9) Ambas bases de datos se superponen substancialmente y sus datos están fuertemente correlacionados ($r=.9556$). Para construir la muestra he utilizado principalmente datos de UN National Accounts. Los datos de Governmental Financial Statistics han sido utilizados únicamente para países no presentes en los datos de las Naciones Unidas.

(10) Rodrik (1998) y Cheibub (1998) han construido recientemente muestras más amplias que incluyen países desarrollados y en desarrollo. De todos modos Rodrik (1998) utiliza consumo público como porcentaje del PIB. Esto es un instrumento demasiado limitado para medir el tamaño del Estado del bienestar y produce resultados altamente sesgados (dado el nivel de importancia del consumo público en países en desarrollo). Cheibub (1998) utiliza datos sobre el gobierno central, que también miden de manera muy imperfecta el gasto público total (especialmente para economías grandes y cerradas, que tienden a estar descentralizadas), y se concentra únicamente en la capacidad impositiva asociada con regímenes políticos diferentes.

(11) Para una discusión de este argumento en el contexto de las fuentes de crecimiento económico, ver Olson (1993). Przeworski y Limongi (1997) ofrecen, no obstante, una visión menos favorable de la capacidad de control de la democracia.

(12) Para una discusión extensa, ver Boix (1999).

(13) Para los resultados de estimar el impacto del porcentaje medio de población urbana, la proporción media del sector agrícola sobre el PIB, la proporción media de la fuerza laboral en el sector de la manufactura, el 'ratio de dependencia', que es el número de años de expectativa de vida que exceden 60, en 1970-90, sobre el tamaño del sector público, ver Boix (1999).

(14) En la muestra considerada en el análisis, hay muy pocos casos autoritarios (algunos exportadores de petróleo) con una renta por cápita sobre 8.000 dólares. La ausencia de dictaduras en niveles altos de desarrollo es un hecho bien establecido en la literatura. Ver Lipset (1959), Limongi y Przeworski (1997).

(15) Para un tratamiento formal de esta cuestión, ver Adserà y Boix (1998).

(16) De hecho la gestión de la demanda agregada puede ser una estrategia efectiva para minimizar la aparición de recesiones. Es decir, imponer una economía cerrada permite que los responsables de la política económica utilicen medidas contracíclicas para suavizar el ciclo de negocios. Romer (1993) y Campillo y Miron (1997) muestran que economías cerradas y inflación tienen una fuerte correlación positiva. Contrastando con esto, la gestión de la demanda en economías abiertas sólo es posible bajo condiciones particularmente restrictivas (Alt 1985; Lange y Garrett 1985), y es sólo sostenible temporalmente.

(17) Para cierta evidencia que atribuye los orígenes del Estado de Bienestar escandinavo a principios de siglo a las demandas de sectores exportadores agrarios, interesados en minimizar riesgos relacionados con la producción, ver Baldwin (1990).

Bibliografía

Adserà, A. y C. Boix, 1998. "Trade, Democracy and the Size of the Public Sector: The Political Underpinnings of Openness". *Political Economy Working Papers Archive*.

Alvarez, M., J.A. Cheibub, F. Limongi y A. Przeworski, 1996. "Classifying Political Regimes", *Studies in Comparative International Development* 31, 3-36.

Alt, J. E., 1985. "Political Parties, World Demand, and Unemployment: Domestic and International Sources of Economic Activity", *American Political Science Review* 79, 1016-40.

Alt, J. E., 1987. "Crude Politics: Oil and the Political Economy of Unemployment in Britain and Norway", *British Journal of Political Science* 17, 149-199.

Alt, J. E. y K. A. Chrystal, 1983. *Political Economics*. Berkeley: University of California Press.

Baldwin, P., 1990. *The Politics of Social Solidarity*. New York: Cambridge University Press.

Boix, C., 1999. "Democracy, Development, and the Public Sector", Manuscrito, The University of Chicago.

Brennan, G. y J. M. Buchanan, 1980. *The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution*. Nueva York: Cambridge University Press.

Cameron, D. R., 1978. "The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis", *American Political Science Review* 72,1243-1261.

Campillo, M. y J. A. Miron, 1996. "Why Does Inflation Differ Across Countries?", Manuscrito, Boston University.

Cheibub, J. A., 1998. "Political Regimes and the Extractive Capacity of Governments: Taxation in Democracies and Dictatorships", *World Politics* 50, 349-376.

Cutright, P., 1965. "Political Structure, Economic Development and National Social Security Programs", *American Journal of Sociology* 70, 537-50.

Esping-Andersen, G., 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.

Flora, P. y J. Alber, 1981. "Modernization, Democratization and the Development of Welfare States in Europe", dentro de P. Flora y A. Heidenheimer, editores, *The Development of Welfare States in Europe and America*. Londres: Transaction Books.

- Frieden, J. A., 1991. *Debt, Development, and Democracy: Modern Political Economy and Latin America, 1965-1985*. Princeton: Princeton University Press.
- Hibbs, D. A. Jr., 1987. *The Political Economy of Industrial Democracies*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Hicks, A. M., 1994. "Introduction to Pooling", dentro de *The Comparative Political Economy of the Welfare State*, editores Thomas Janoski y Alexander M. Hicks. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hicks, A. M. y D. H. Swank, 1992. "Politics, Institutions and Welfare Spending in Industrialized Democracies, 1960-82", *American Political Science Review* 86, 658-74.
- Hirschman, A. O., 1981. "Exit, Voice, and the State", dentro de Albert O. Hirschman, *Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press, 246-265.
- Holsey, C. M. y T. E. Borcherding, 1997. "Why Does Government's Share of National Income Grow? An Assessment of the Recent Literature on the U.S. Experience", dentro de Dennis C. Mueller, ed. *Perspectives on Public Choice: A Handbook*. Nueva York: Cambridge. 562-589.
- Hsiao, C., 1986. *Analysis of Panel Data*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huber, E., C. Ragin, y J. Stephens, 1993. "Social Democracy, Christian Democracy, Constitutional Structure and the Welfare State", *American Journal of Sociology* 99, 711-49.
- Jackman, R. W., 1975. *Politics and Social Equality: A Comparative Analysis*. Nueva York: Wiley.
- Katzenstein, P., 1985. *Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe*. Ithaca: Cornell University Press.
- Keohane, R. O. y H. V. Milner, eds. 1996. *Internationalization and Domestic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Korpi, W., 1989. "Power, Politics and State Autonomy in the Development of Social Citizenship: Social Rights during Sickness in Eighteen OECD Countries since 1930s", *American Sociological Review* 54, 309-28.
- Lange, P. y G. Garrett, 1985. "The Politics of Growth: Strategic Interaction and Economic Performance in the Advanced Industrial Democracies, 1974-1980", *Journal of Politics* 47, 792-827.
- Lipset, S. M., 1959. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy", *American Political Science Review* 53, 69-105.
- Lucas, R. E. Jr., 1990. "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?", *American Economic Review*, 82, 1-13.
- Lybeck, J. A., 1988. "Comparing Government Growth Rates: The Non-Institutional vs. the Institutional Approach", dentro de Lybeck, Johan A. y Magnus Henkerson, editores, 1988. *Explaining the Growth of Government*. Amsterdam: North-Holland. 29-48.
- Meltzer, A.H. y S. F. Richards, 1981. "A Rational Theory of the Size of Government", *Journal of Political Economy* 89, 914-927.
- Mueller, D., 1988. *Public Choice II*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulo 17.
- OCDE, 1991. *OECD National Accounts. Main Aggregates*. 1960-89. Vol. I.
- Olson, M., 1993. "Dictatorship, Democracy, and Development", *American Political Science Review* 87, 567-576.
- Pampel, F.C. y J.B. Williamson, 1988. "Welfare Spending in Advanced Industrial Democracies, 1950-80", *American Journal of Sociology* 93, 1424-56.
- Peacock, A. T. y J. Wiseman, 1961. *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. Princeton: Princeton University Press.
- Przeworski, A. y F. Limongi, 1997. "Modernization: Theories and Facts", *World Politics* 49 (Enero).
- Przeworski, A. y M. Wallerstein, 1988. "Structural Dependence of the State on Capital", *American Political Science Review* 82, 11-30.
- Rodrik, D., 1998. "Why Do Open Economies Have Bigger Governments?", *Journal of Political Economy* 106 (Octubre), 997-1032.
- Romer, D., 1993. "Openness and Inflation: Theory and Evidence", *Quarterly Journal of Economics* 107, 869-904.
- Titmuss, R., 1958. *Essays on the Welfare State*. Londres: Allen and Unwin.
- Weingast, B., 1995. "The Economic Role of Political Institutions. Market-Preserving Federalism and Economic Development", *Journal of Law, Economics and Organization* 11.
- Wilensky, H. L., 1975. *The Welfare State and Equality*. Berkeley: University of California Press.

Títulos publicados

- 1. Una reflexión sobre el desempleo en España**
Ramon Marimon (Junio 97)
 - 2. Reducir el paro: ¿a cualquier precio?**
Fabrizio Zilibotti (Diciembre 97)
 - 3. Impuestos sobre el capital y el trabajo, actividad macroeconómica y redistribución**
Albert Marcat (Noviembre 98)
 - 4. El prestamista en última instancia en el entorno financiero actual**
Xavier Freixas (Noviembre 99)
 - 5. ¿Por qué crece el sector público? El papel del desarrollo económico, el comercio y la democracia**
Carles Boix (Noviembre 99)
-



Carles Boix

Carles Boix es Master en Administración Pública por la John F. Kennedy School of Government (1990) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard (1995).

Es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y co-director del Seminario Naciones, Estado y Política en la misma. También ha sido profesor en la Ohio University y profesor visitante en la Universitat Pompeu Fabra y en el Centro para Estudios Avanzados del Instituto Juan March de Madrid.

Sus principales líneas de investigación son: la economía política, las bases sociales e institucionales de la democracia, y el origen y desarrollo de las instituciones políticas.

Boix ha publicado artículos en revistas internacionales especializadas como *American Political Science Review*, *American Journal of Political Science*, *British Journal of Political Science* y *Electoral Studies*. Su libro *Political Parties, Growth and Inequality* (Cambridge University Press, 1998) ha ganado el American Political Science Association Best Book Award de 1999 al mejor libro en economía política.

CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA INTERNACIONAL

GENERALITAT DE CATALUNYA
I UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona

Tel: 93 542 24 98 - Fax: 93 542 18 60

E-mail: crei@upf.es

<http://www.econ.upf.es/crei>

P.V.P.: 1.000 Ptas.

 Generalitat de Catalunya
Departament de Presidència

 UNIVERSITAT
POMPEU FABRA